

Antonio Elorza

España: identidades y opinión pública

La identidad surge de una relación especular respecto de otro, trátase de individuos, grupos o colectivos más amplios, tales como los miembros de un linaje, de una localidad o de una nación. Un hombre o un grupo aislado carece de identidad: es la alteridad lo que determina la exigencia de potenciar la subjetividad propia, con el objeto de marcar una divisoria frente al exterior y crear mecanismos de cohesión en el grupo al que se pertenece. El sentimiento identitario encuentra su origen en el mundo animal, de acuerdo con el principio de que «los pájaros del mismo plumaje forman bandada», que enunciara Anthony Giddens, y se encuentra en las sociedades llamadas primitivas, cada una de las cuales tiende a autodefinirse positivamente —son «los verdaderos hombres», «los que dicen la verdad»— frente a otras agrupaciones vecinas y competidoras.

En las sociedades complejas, la forja de la identidad puede responder a factores objetivos, pero también a procesos de creación de carácter ideológico, e incluso a causas que se sitúan en el terreno de la psicología social o de la cultura. Identidades que hoy son consideradas milenarias, pueden haber surgido en tiempos no lejanos y a partir de la incidencia de variables externas. Tal es el caso del hinduismo, visto hoy como forma de pensamiento religioso-filosófico propio de la India desde sus orígenes, fundamento como tal de su identidad, cuando su origen se remonta sólo a fines del siglo XVIII, siendo el gobernador británico Warren Hastings quien puso en marcha un proyecto «orientalista» con amplia participación de intelectuales indios y europeos que procedieron a sistematizar el legado cultural de la antigua civilización, que acabó enmarcada en el neologismo «hindú», convertido luego en esencia de la identidad nacional: «*hidutva*» (hinduidad), título de la obra de Savarkar, el Sabino Arana del nacionalismo indio.

La identidad colectiva puede ser, en consecuencia, el producto natural de un proceso histórico o de una circunstancia geográfica, pero asimismo resultar de una auténtica invención o de una sucesión de cambios en la mentalidad. Para el tema que nos concierne, durante

siglos los vascos vivieron en espacios políticos diferenciados, lo cual se reflejó en una pluralidad de identidades: guipuzcoanos, vizcaínos, alaveses, navarros. Es en el siglo XVIII cuando tanto el pensamiento ilustrado como el fuerista comienzan a hacer encajar las piezas del *puzzle*: provincias «bascongadas» en la Sociedad Bascongada de los Amigos del País, sueño de las Provincias Unidas del Pirineo apuntado por el guipuzcoano Larramendi. La identidad conjunta avanza en el siglo XIX, si bien es muy significativo que todavía al finalizar el siglo el fundador del nacionalismo, Sabino Arana, lo haga desde y en nombre de Vizcaya, como *bizkaitarra*. Tampoco la pretensión patriótica de considerar vascos a los navarros superará la división de opiniones en el antiguo reino, lo cual no impedirá que el nacionalismo acabe predicando la identidad vasca como algo irrenunciable, tanto para la actual Euskadi como para Navarra y el País Vasco francés, sobre la base de un idioma propio ampliamente minoritario en la unidad nunca alcanzada de Euskal Herria. El caso vasco es, como vemos, una buena muestra del desfase que puede existir entre la afirmación de una identidad desde una posición política, la de los partidos nacionalistas y la que efectivamente sienten los ciudadanos.

Tal y como la conocemos hoy, la identidad correspondiente al Estado nación y a sus alternativas es el producto de un proceso secular en que intervienen la historia política y la elaboración cultural de las elites, sin que ello signifique la asunción de la misma por una mayoría de la población, para la cual la identidad sólo llega cuando tiene lugar lo que George L. Mosse ha llamado la *nacionalización de las masas*. Es entonces cuando entra en juego la presencia o ausencia de mecanismos de integración establecidos por el Estado, desde la oferta de servicios de interés general a las agencias de socialización que en el mundo contemporáneo encarnan la escuela y el ejército. Es el fracaso, o las deficiencias observables en ese marco integrador, lo que propicia —como ocurre en la España del siglo XIX— la aparición y el desarrollo de identidades concurrentes, tanto en el plano cultural como en el político.

Para España, Francia ofrece un buen punto de comparación, ya que desde la Edad Media ambas se constituyen en paradigmas de la formación de Estados tendencialmente unitarios, en la forma de monarquías absolutas que entre los siglos XV y XVIII experimentan un afortunado proceso de agregación a partir de un núcleo —el *domaine royal* para el caso francés, el reino de Castilla en la Península—, reflejado en

una identidad correspondiente al éxito de su constitución en grandes potencias europeas. También en ambos casos, la literatura desempeña un papel fundamental a la hora de unificar el lenguaje y potenciar ese sentido de pertenencia colectiva. El enfrentamiento político y armado entre Francia y España de los siglos *xvi* y *xvii* intensificará aún más esa orientación. Ello no es incompatible con la presencia de otras identidades que calificaríamos de regionales, cuya suerte definitiva ha de jugarse en el siglo *xix*. Visto el paisaje histórico desde hoy, existe la falsa impresión de que la afirmación de los «derechos históricos» en el País Vasco y en Cataluña, apoyándose en la singularidad institucional del Antiguo Régimen, es algo específicamente hispano y hunde sus raíces en el tiempo que precede a las revoluciones, cuando las dos monarquías habrían apuntado ya a trayectorias divergentes. No es así. Al margen de la relativa correspondencia que puede establecerse en cuanto a singularidad de los países forales con los *pays d'États*, Bretaña es un ducado cuya incorporación a la monarquía francesa en 1532 implica una supervivencia institucional semejante por lo que respecta a la Corona de Castilla a la del reino de Navarra, por lo demás subsistente en Francia desde minúscula merindad de Ultrapuertos (Saint-Jean-Pied-de-Port), y Bearne incluso declaró institucionalmente su soberanía en la segunda mitad del siglo *xvi*, con el respaldo de la reforma protestante y la negativa de Enrique de Borbón a incorporarle a un reino de Francia que acabará con la excepción bearnesa merced a la expedición de Luis XIII a Pau en 1620. Todavía al ser redactados los *cahiers de doléance* en los prolegómenos de la Revolución, la nobleza provenzal afirmará la condición nacional del antiguo reino a fin de mantener una exención fiscal. Sólo que nadie habla hoy de derechos históricos de Bearne, Navarra, Bretaña o Provenza: en nombre de la nación francesa, y gracias al proceso de asimilación nacional definido por la división administrativa de la Revolución, que culmina en la guerra de 1914-1918, tales singularidades carecen de la menor relevancia política. No es, pues, en los antecedentes del Antiguo Régimen, sino en la lectura de los mismos a partir de la construcción del Estado nación en los siglos *xix* y *xx* donde se forjan la consolidación de la unidad (Francia) o una posible fragmentación impulsada desde los nacionalismos periféricos (España).

En *Boundaries. The Making of France and Spain in the Pyrenees*, Peter Sahlins estudia sobre la evolución de las identidades nacionales

en la Cerdanya, comarca catalana dividida entre Francia y España por efecto de la Paz de los Pirineos. El autor recoge la anécdota del viaje en la década de 1930 de un catalanista barcelonés, Cases Carbó, a las tierras catalanas que integran el departamento francés de los Pirineos Orientales. Su propósito consistía en indagar acerca de las causas de la inexistencia de un sentimiento nacionalista autóctono en la Cataluña francesa. Un agricultor se lo explica con un punto de lamento:

¡Ah! ¡A pesar de todo tenéis suerte! ¡Podéis ser catalanistas! Nosotros no podemos. ¿Queremos una carretera? Nos la dan. ¿Pedimos el telégrafo? Nos lo instalan. ¿Una escuela? Nos la dan. No podemos estar descontentos del gobierno de París. ¡Felices vosotros que podéis ser catalanistas!

En un estilo franco y hablando en *patois*, el payés apuntaba a un hecho decisivo: la diferencia entre Francia y España en cuanto a presencia o ausencia de los nacionalismos periféricos no se explicaba por la naturaleza de los hechos diferenciales. En Francia vivían y viven catalanes y vascos, sin que tuviera lugar la eclosión de movimientos nacionalistas como en España, y si los gallegos eran diferentes en lengua y costumbres de los castellanos, más lo eran bretones y alsacianos de las gentes del resto de Francia. La suerte de los nacionalismos en ambos países se jugó en ambos Estados nación a partir de datos de partida similares, siendo Francia y España monarquías de agregación que experimentaron en el siglo XVIII una fuerte presión centralizadora, sin que hasta entonces quedaran borradas las especificidades administrativas de determinadas regiones con su consiguiente reflejo cultural. En *L'identité de la France*, Fernand Braudel explica que «no sólo hay en Francia una lengua de oc y una lengua de oil, más las lenguas casi extranjeras que son en la periferia del reino el vascuence, el bretón, los dialectos flamenco del Norte y alemán del Este [el autor olvida aquí el catalán], sino infinitos *patois* provinciales y aun locales». En medio del mosaico institucional, el francés era incapaz de servir como lengua de comunicación. Una situación más grave que la española. Sólo que en aras del «espíritu público», con el objeto de unificar efectivamente la nación, la Revolución abordó los cambios legales que abolieron la fragmentación administrativa de raíz histórica y prepararon a lo largo del siglo XIX y primeras décadas del XX, escuela y comunicaciones mediante la unificación lingüística y cultural. El Estado nación puso en marcha los mecanismos de integración económicos, administrativos, culturales y simbólicos, gracias a los cuales toda alternativa a la cons-

trucción unitaria resultó eliminada. La España del siglo XIX siguió formalmente el patrón francés, pero el atraso económico tejó la tela de los estrangulamientos que en todos los órdenes afectaron al funcionamiento del Estado nación.

El estallido de la insurrección contra el ejército de ocupación napoleónico en mayo de 1808 prueba que en España se daban los supuestos políticos, culturales e identitarios para que ese fracaso no hubiese tenido lugar. A diferencia de otros países que permanecieron pasivos ante la ocupación francesa, Napoleón tropezó en España con una reacción muy violenta y ampliamente difundida, xenófoba y tradicional en los niveles populares y eclesiásticos, pero a diferencia de Tirol con una inmediata opción modernizadora en unas elites ya dispuestas de antemano a ajustar cuentas en sentido nacional y liberal con el «despotismo ministerial» en que había degenerado la monarquía absoluta. Desde un primer momento, la guerra contra el francés se hizo en nombre de «la independencia» que correspondía a la nación española y para alcanzar asimismo la libertad política mediante el establecimiento de una Constitución. Una proclama de agosto de 1808, redactada por el catedrático Antonio Peña, resume el espíritu de tantos otros escritos:

Espanoles: No basta vencer ejércitos enemigos para vivir felices. Es necesario reformar nuestras instituciones políticas si queremos evitar otra y más veces los males que en el día nos afligen y de que aun no estamos libres. Una nación no puede prosperar sin un buen gobierno, sin una constitución o, lo que es lo mismo, sin unas leyes fundamentales que ella misma establezca.

«La verdadera soberanía reside en la Nación reunida por medio de sus representantes», añade Manuel José Quintana, editor de *El Semanario Patriótico*, primer periódico liberal en 1808. Lo cual no significa ignorar la composición plural que caracteriza a la nación española, manifestada en el policentrismo del levantamiento antifrancés. En su *Centinelá contra franceses*, lo resume Antonio María de Capmany:

Cada provincia se esperezó y se sacudió a su manera. ¿Qué sería ya de los Españoles, si no hubiera habido Aragoneses, Valencianos, Murcianos, Andaluces, Asturianos, Gallegos, Extremeños, Catalanes, Castellanos, etc.? Cada uno de estos nombres inflama y envanece, y de estas pequeñas naciones se compone la masa de la gran Nación.

Ninguna expresión más clara de la identidad dual que aún prevalece hoy en las «pequeñas naciones» donde los nacionalismos periféricos han alcanzado la hegemonía política.

La evolución española a lo largo del siglo XIX irá apagando esas expectativas de afirmación nacional, concretadas en la Constitución liberal de 1812, y que sufren los golpes sucesivos de la pérdida del imperio continental americano y de una transición marcada por las guerras (de la lucha por la independencia a las carlistas), con el efecto de un grave empobrecimiento del país. «El liberalismo triunfó en España —ha escrito Pierre Vilar— al mismo tiempo que se hundían los requisitos que hicieron posible su aparición». De este modo, la tardía formación del mercado nacional, el predominio de una agricultura de subsistencia que generaba una débil demanda interior, con una industrialización focalizada, por puro azar primero en Cataluña y luego en Vizcaya, regiones marcadamente diferenciadas en cuanto a la historia política y a la cultura, todo ello configura un marco restrictivo en el cual tiene lugar la difícil institucionalización del Estado liberal, tras una prolongada secuencia de guerras y enfrentamientos con los defensores del Antiguo Régimen. El Estado resultante, dominado por la Corona, los liberales «moderados» y los caudillos militares, reprodujo el modelo francés de centralización, si bien con marcados acentos defensivos (Guardia Civil, plétora de oficiales en el Ejército) y un armazón administrativa muy débil, obligada a recurrir a las redes clientelares y al caciquismo para el mantenimiento del sistema de poder.

Fue un Estado débil y opresivo, incapaz de poner en marcha los mecanismos necesarios para consolidar el Estado nación. Las dos agencias de socialización clásicas, el servicio militar y la escuela, fueron ante todo causas de fractura, quedando reservado el primero hasta el nuevo siglo para quienes no podían pagar la contribución a metálico y tenían que prestar «la contribución de sangre», en tanto que la segunda incumplía la función nacionalizadora por pura y simple falta de recursos, ya que el Estado no paga a los maestros hasta 1902. De manera que con muy altas tasas de analfabetismo, el maestro acabó convertido en símbolo de opresión cultural, por añadidura ineficaz, para las regiones con idioma propio. Hubo un intento fugaz de cambio con la República federal de 1873, atrapada sin embargo de inmediato en la ausencia de una base social que respondiera al proyecto de modernización política y de justicia social. Su fracaso ejerció además un prolongado efecto de desprestigio del federalismo en cuanto factor de disgregación, observable tanto en 1931 como en 1978, e incluso en el presente.

La Restauración monárquica y conservadora de 1874-1876 alcanzó a crear un cierto equilibrio estabilizador en el vértice del sistema político, con la rotación de partidos en el gobierno y una paulatina ampliación de las libertades. Pero las insuficiencias de fondo persistieron y quedaron al descubierto de modo espectacular con el Desastre de 1898: fin del imperio colonial por la derrota ante los Estados Unidos, tras haber literalmente provocado la insurrección cubana de 1895 por la incapacidad para modernizar la gestión corrupta, ineficaz y represiva ejercida sobre la Isla. Como consecuencia, según la expresión del premier británico Lord Salisbury, España era un caso de «país moribundo» a contracorriente de su entorno europeo, naciones que por su decadencia y mal gobierno estaban condenadas a la pérdida de territorios y a la subordinación respecto de las «naciones vivas». Para los intelectuales hispanos empezaba la interminable reflexión sobre *el problema de España*. Para los movimientos hasta entonces minoritarios que habían ido surgiendo en la periferia, en las regiones con sólidas señas de identidad históricas y culturales —Cataluña, País Vasco, Galicia—, llegaba la hora de plantear una alternativa a un Estado-nación simbólicamente en quiebra.

Las formulaciones doctrinales de los tres movimientos habían coincidido en el tiempo, en torno a 1890: *La patria gallega* de Manuel Murguía y *El regionalismo* de Alfredo Brañas, las *Bases de Manresa*, *Bizkaya por su independencia* de Sabino Arana. Pero es la crisis del 98 la que abre el camino para el crecimiento del catalanismo y del nacionalismo en las dos zonas donde se registraban procesos de industrialización y se da una dinámica social con la formación de grupos sociales susceptibles de impulsar dichos movimientos. En Galicia, la ausencia de transformaciones capitalistas bloqueará durante décadas la gestación de un regionalismo político importante, a pesar de la intensidad del hecho diferencial. Tal y como había previsto hacia 1840 el precursor Antolín Faraldo, el rasgo definitorio de Galicia era la «excentralización», el aislamiento respecto de la España centralizada (el enlace ferroviario sólo llegará en 1883), y también en su configuración interna, un mundo de parroquias rurales sin apenas centros urbanos de entidad, pero precisamente eso mismo que la singulariza constituye el factor decisivo de estrangulamiento a la hora de impedir el ascenso de las fuerzas sociales que diera consistencia a un galleguismo de intelectuales.

Incluso en el País Vasco, la implantación del nacionalismo, primero limitada a Vizcaya, sigue la estela de la industrialización, con el apoyo que representa en el orden político la prolongada supervivencia en las tres provincias hasta 1876 (1841 para Navarra) de un régimen administrativo propio, los Fueros, con una considerable carga simbólica al legitimar una eventual aspiración a la independencia. De Sabino Arana a Ibarretxe y a ETA, los «derechos históricos» son el agente de legitimación del nacionalismo vasco radical. La memoria histórica se encuentra asimismo presente en el regionalismo catalán con la evocación de la resistencia frente a Felipe de Borbón, de 1702 a 1714. No obstante, las coincidencias se agotan aquí. En tanto que para Cataluña el catalanismo refleja el desajuste entre la región más moderna y el resto de España, desembocando en un movimiento regenerador cuya presencia acaba siendo compatible con la inclusión en el Estado español, en el caso vasco la violencia del proceso de cambios causado por la industrialización vizcaína, el enlace con el pasado reciente también traumático de las guerras carlistas y con el citado agente de legitimación que fuera el régimen foral apenas suprimido, confieren al movimiento nacionalista un sesgo de ruptura. El propósito del catalanismo consistirá en defender los propios intereses económicos y alcanzar la hegemonía en una España modernizada; el nacionalismo vasco asume en cambio desde el comienzo la propuesta de fractura del Estado. En ambos casos, eso sí, la propuesta se apoya sobre una puesta en cuestión de la identidad nacional española.

España rota

El tópico de las «dos Españas» tiene una base real: la tensión entre arcaísmo y modernidad que se manifiesta en las décadas finales del siglo XVIII. El sólido control de la Iglesia, vía presencia en el Estado por medio de la Inquisición y una gran concentración de propiedades, reacciona muy pronto contra las ideas de reforma social y política, procediendo a su persecución y a anatematizarlas. «La intolerancia es una ley fundamental de la nación española; no la estableció la plebe, no es ella quien debe abolirla»: esta declaración de un inquisidor anónimo en 1789, frente a la volteriana reivindicación de tolerancia formulada por uno de nuestros primeros publicistas liberales, pone de manifiesto una incompatibilidad, a la cual pronto han de sumarse los elementos conservadores de la burocracia ilustrada.

Anticipándose a la *Historia de los heterodoxos españoles* del erudito Marcelino Menéndez y Pelayo, Juan Pablo Forner escribe la *Apología por la España y su mérito literario*, donde se dibuja una identidad española ajena a los cambios del pensamiento europeo. Frente a ella, el más ácido de nuestros periodistas ilustrados, Luis Cañuelo, escribe una *Apología por el África y su mérito literario* en su semanario *El Censor*, una polémica destinada a durar siglo y medio. Para conservadores y reaccionarios, el catolicismo y el ensimismamiento constituyen la base de la identidad española; para liberales y progresistas, hay que partir del reconocimiento del atraso para aproximarse a Europa. Tal será la fórmula a comienzos del siglo xx de Joaquín Costa, regeneración y europeísmo, pronto desarrollada y enriquecida por José Ortega y Gasset, en medio de la cascada de reflexiones sobre el problema de España que suscitó el desastre de 1898. Por lo demás, tampoco este tema se agota en las primeras décadas de siglo. Todavía en los años cuarenta debaten el futuro liberal Pedro Laín Entralgo, en su *España como problema*, con el opusdeista Rafael Calvo Serer en *España sin problema*. Lo que cuenta es que desde los prolegómenos de la revolución liberal subsisten una consideración problemática y el pesimismo en torno al futuro de la identidad española.

La extrema derecha ahondará aún más la fractura, al identificar la nación con sus contenidos tradicionales y represivos, excluyendo de la misma a los «heterodoxos» de todo tipo. Aquéllos que piensan como los filósofos franceses sólo deben esperar una cosa, el quemadero, advertía el Padre Alvarado, uno de los más prolíficos propagandistas serviles frente al liberalismo de Cádiz. Toda la retórica desplegada en los años anteriores a la Guerra Civil contra la Antiespaña responde a la misma idea fuerza. De hecho, España sólo es la parte reaccionaria, y en el mejor de los casos conservadora, de la sociedad española. Cuando en noviembre de 1935 el general Franco, aún a las órdenes del ministro Gil-Robles, se entrevista con el embajador francés Jean Herbette, le anuncia que en España hace falta realizar «una operación quirúrgica», esto es, una amputación de sus miembros gangrenados, comunistas y masones, libre-pensadores y anarquistas, demócratas y sindicalistas. Es lo que va a ejecutar de forma implacable en el curso de la Guerra Civil y años sucesivos, al servicio del lema joseantoniano de la España una, grande y libre. En la práctica, al servicio de la estrecha concepción nacionalista que desde el Desastre presidía la mentalidad del corporativismo militar (recordemos el filme *Raza*).

El político profascista José Calvo Sotelo había dicho en un mitin que prefería una España roja a una España rota. En la misma línea, la obsesión de los nacionalismos planeará a lo largo y ancho de toda la era franquista con el fin de proteger «la unidad de los hombres y de las tierras de España». Sólo que esa exaltación del nacionalismo español, impregnada de militarismo y de nacional-catolicismo, venía a socavar de forma decisiva los fundamentos de la nación española, al identificarla con todos los aspectos negativos de la dictadura. El franquismo fue ineficaz en cuanto agente de fortalecimiento a medio plazo del nacionalismo español y empapó la identidad española de contenidos reaccionarios. Antes, en y después de la transición democrática, toda oposición a las pretensiones nacionalistas de catalanes o vascos fue inmediatamente denunciada como franquista, y la propia concepción de España, por encima de la nueva realidad democrática, resultó afectada por esa contaminación. Incluso la mentalidad de los demócratas españoles sufrió el impacto de ese menosprecio de la nación, que quedó como reserva de los sectores políticos conservadores, muy marcados en su idea de España por el antecedente franquista.

La condena de la identidad

Es en la segunda mitad del siglo XIX cuando los pensadores catalanes, los más destacados procedentes del federalismo, elaboran el esquema dual que marca la contraposición entre Cataluña y España: de un lado, la argumentación historicista, que permite asentar el rechazo del moderantismo sobre una imagen del pasado en que indefectiblemente la aspiración de libertad de Cataluña, presente ya en los tiempos de la Corona de Aragón, tropieza con la vocación opresora de Castilla; de otro, la conciencia de superioridad, surgida de la brillante evolución económica de Cataluña, por contraste con la incapacidad de Castilla (y de España) para construir una sociedad y un Estado modernos. Una valoración que se convertirá en tópico como consecuencia de la crisis del 98. «Cataluña es más europea, más futurista que España», escribía en 1905 el catalanista liberal Gabriel Alomar, evocando su comportamiento supuestamente opuesto ante la guerra de Cuba: proclamó «la libertad de los pueblos» por contraste con «una multitud baja, servil y tabernaria que entonaba himnos de guerra acompañando a la lastimosa procesión de los reclutas que iban hacia la muerte». «Somos plena-

mente compatibles con la vida moderna», concluía, como premisa del «ideal de liberación».

El político que encarna la transición del federalismo al catalanismo en la década de 1870, Valentí Almirall, estableció quien elabora una codificación destinada a durar en su libro *Lo catalanisme*, de 1886. Ya antes había escrito un folleto significativamente titulado «Guerra a Madrid». La versión española de la centralización constituía la expresión de un mundo despreciable, apegado «a las clases parásitas, a las clases feudales del militarismo, de la burocracia, de la explotación, del agio y del fanatismo», enfrentadas a «las fuerzas vivas de la patria». «Cataluña —resume asumiendo el argumento historicista—, desde que la fuerza de las armas la sujetó al despótico imperio de las casas de Austria y Borbón, ha sido víctima constante de las falsificaciones del centro». Era algo más que una acumulación de rasgos sociológicos negativos. La degeneración histórica de Castilla se encontraba inscrita en la historia, con el Quijote a modo de emblema de un conjunto de valores incompatibles con la modernidad. El carácter castellano, piensa Almirall, «incapaz de toda empresa positiva, vegeta en la miseria moral y material». Ha perdido su puesto en «la civilización actual». Una confederación donde se desenvolviese libremente la capacidad de Cataluña sería la única salida.

Finalmente, la consideración enteramente peyorativa de la España unitaria, opresiva y parásita, llevaba de modo inevitable a la ruptura, fundamentada sobre la negación del hecho y de la identidad nacional españoles. La crisis del 98 crea el ambiente propicio para ese último paso (acompañado, por cierto, de un giro conservador y antimodernista), visible en los titulares con que celebra *La Nació Catalana* la derrota ante Estados Unidos: «España agonizante. Descrédito vergonzoso del quijotismo y de la patriotería. Triunfo del catalanismo». Cobraba así vigencia la rotunda contraposición que en 1890 hiciera uno de los fundadores de la Lliga de Catalunya: «España no es una nación en la verdadera acepción de la palabra, sino un Estado formado por diferentes naciones, cuyos elementos u organismos sociales son distintos». «España no es una nación, sino un Estado», confirmará el fundador Enric Prat de la Riba, siempre en 1890. Con una consecuencia inequívoca: «Vengo a hablaros de la Patria Catalana, la cual, pequeña o grande, es nuestra única patria». «Euzkadi bakarra da, gure aberria», replicó miméticamente el nacionalismo vasco.

Su fundador, Sabino Arana, vive como estudiante en Cataluña durante la década de 1880 y sin duda el ambiente barcelonés, con toda probabilidad la lectura de *Lo catalanisme*, le sirve para efectuar la necesaria conversión de su racismo de Antiguo Régimen, de raíz fuerista, en un racismo moderno, agresivamente antiespañol, cargado con el conjunto de relatos catalanes sobre la degeneración de Castilla. A fin de cuentas, Almirall manifestaba simpatía por el pueblo degenerado de Castilla; Arana lo detesta. El contexto del pensamiento sabiniano es el proceso de cambios de poder, demográficos y culturales que acompaña a la industrialización de Vizcaya, sobre el telón de fondo de la pérdida definitiva de los fueros en 1876 (compensada en el orden financiero con el Concierto Económico de 1881). Implica una respuesta reaccionaria, inspirada en el antecedente del carlismo y cargada de contenidos racistas contra aquéllos que vienen «de fuera» trátase de políticos, profesionales o trabajadores.

Léon Poliakov creía que el nacionalismo alemán era el único de raíz biológica en la Europa de 1900: olvidaba el vasco en la versión de Sabino Arana. Tanto sus escritos en prosa como en verso se encuentran inspirados por un odio sin límites al pueblo que privó a los vizcaínos —su nacionalismo es primero *bizkaitarra*— de la independencia que a su juicio disfrutaban bajo los fueros entendidos como *lagi zarrak*, leyes viejas o antiguas que les aseguraban una vida libre y virtuosa. El español es un pueblo degenerado, inculto, irreligioso, bárbaro, cuyo contacto, especialmente cuando se ejerce en forma de dominio, supone una contaminación inevitable para los vizcaínos. Es la raza impura, contra la cual sólo cabe un rechazo tajante, que habría de hacerse extensivo a los vizcaínos/vascos que no lo suscriben. Su programa se resume en el poema «Ken!»:

¡Kendu, kendu maketuok eta euzkeldun maketuzaliok!
¡Bota, bota azurbaltzok eta euren lagun guztijok!¹

Es un programa muy simple, que sigue inspirando hasta nuestros días, convenientemente disimulado, el gran rechazo que aún constituye el núcleo del nacionalismo radical y de buena parte del democrático, coincidentes ambos en designar al actual lehendakari, presidente vasco, como «López» o «señor López», para marcar la distancia insalva-

1 «Quita, quita maketos y euskeldunes maketófilos; / fuera, fuera azurbelchas y todos sus amigos [o compañeros].»

ble con los verdaderos integrantes del «pueblo vasco». Después de 1945 el racismo explícito no pudo ser mantenido, siendo reemplazado por la discriminación lingüística contra los que no hablaban euskera (*euskeldunmochas*), a propuesta del filólogo militante Federico Krutwig, que no varió mucho las cosas ya que los *euskeldunes* pertenecían casi sin excepciones a la población autóctona, y por fin desde los años setenta, al aplicar el concepto de «pueblo trabajador vasco», la discriminación cedió para quienes militaran en el nacionalismo radical. Cambios que en modo alguno alteraron el enfrentamiento insalvable del sujeto racial por excelencia, «el pueblo vasco» frente a los *invasores* españoles. El tema de los invasores, en términos sabinianos apenas disimulados, seguía presidiendo la argumentación de Jon Salutregi, director de *Egin* antes de las elecciones de 2001, e incluso la distribución por el diario de un ajedrez patriótico de *euskeldunes* contra invasores.

La presencia del racismo en la sociedad vasca del Antiguo Régimen se remonta a principios del siglo XVI, cuando los estatutos de limpieza de sangre difundidos en España para sellar la discriminación de las minorías (inicialmente, los conversos) pasan a ser en Vizcaya y Guipúzcoa instrumentos de eliminación que, con el tiempo y hasta el siglo XIX, afectarían a «judíos, moros, herejes y gentes de mala raza». La pureza de raza era la base del principio de nobleza universal, a su vez fundamento sociológico de unos fueros que en términos históricos se justificaban por la independencia originaria y, en el caso vizcaíno, por la resuelta determinación para rechazar a los invasores castellanos. No en vano el primer librito de Sabino Arana es *Bizkaya por su independencia*, donde se relatan esas cuatro batallas victoriosas y cercana ya su muerte, cuando en la superficie propone por motivos tácticos una Liga de Vascos Españolista, el tema reaparece en *Libe*, con la heroína que sufre la muerte por la patria tras haber pecado por amar a un conde castellano, invasor de Vizcaya. Siempre la pureza de raza en un escenario de guerra antigua que es preciso actualizar.

El fondo religioso integrista refuerza ese sentimiento de lucha, ya que aceptar al maketo es aceptar la corrupción y la guerra contra España es una obligación sagrada, para recuperar la independencia de las «leyes viejas». Sólo que Sabino Arana es también y casi por encima de todo un discípulo de San Ignacio, con lo cual el absolutismo de los principios se conjuga con el pragmatismo de los medios. Es posible inclu-

so entrar con «el enemigo» —término ignaciano que llega a nacionalistas de hoy como Joseba Egibar y por supuesto a ETA—, siempre que se salga con uno mismo. De ahí el equívoco de las supuestas dos almas del nacionalismo vasco, confundiendo el pragmatismo con una alternativa. Por supuesto, desde Eduardo Landeta y los *euskalerriacos* de principios del siglo xx hasta la reciente experiencia de Jusu Jon Imaz, se han sucedido los intentos, siempre hasta ahora fracasados. Encubierto primero bajo la propuesta de *status* de «libre asociación», léase Estado Libre Asociado al modo de Irlanda 1921-1922, el proyecto de Ibarretxe en 2001 era estrictamente secesionista. Basta con leer su articulado y en particular los artículos, que reducen a límites ridículos las competencias del Estado, en tanto que al legislativo vasco le corresponden todas las no explícitamente cedidas. Así, ese «pueblo vasco», con ocho o siete mil años de cultura propia, según Ibarretxe, recuperará su protagonismo hasta hoy interferido por España.

En el fondo, se mantiene la intransigencia derivada del odio al invasor, que aún hoy anima al entorno político de ETA y a los sectores independentistas del nacionalismo democrático. Sabino Arana lo había proclamado una y otra vez, acompañando siempre la condena de la sucesión de términos peyorativos que arrancan de la discriminación medieval contra los agotes (*belarrimochas*, «orejas cortas», Sabino Arana lo usa en euskera, *motzak*), siguen conjugando la discriminación racial con la ideológica (*azurbeltzak*, que llevan el negro, el liberalismo, en los huesos, actualizado recientemente con «tenéis la sangre rojigualda» para cerrar con el bilbainismo *maketos* para los inmigrantes —desde los años cincuenta se les llamará «coreanos»— y Maketania para España). Si el maketo destruye y corrompe a los vascos, ¿cómo no odiarle? «Para amar a Vizcaya, antes que nada hay que ser enemigo de sus enemigos», resume Sabino Arana. El modelo del pasado es pura y simple destrucción de los *mochas*: «nuestros antepasados les destrozaron y en un baño de sangre [*sic*] les arrojaron fuera de las fronteras de la patria». El *erdera* (castellano) será eliminado y llegará la utopía moral, resultado de la independencia: «Los buenos usos y las buenas costumbres, en adelante sustituirán a las viciosas de los mochas». Estricto totalitarismo racista, cuyas aristas formales se irán necesariamente limando, pero que anima aún hoy la vertiente radical del nacionalismo. Sabino Arana fundó una religión política sobre la base del odio, sin la cual el fenómeno ETA no podría ser entendido, lo

mismo que la benevolencia con que ha sido tantas veces considerado desde el nacionalismo democrático vasco. La reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos constata la vinculación entre Batasuna y ETA. Si tenemos en cuenta la insistente defensa por parte del PNV de la legalidad del brazo político de ETA, siendo por otra parte los primeros en conocer la situación, ello sólo puede ser interpretado con un distanciamiento del terror que no impide un sentimiento de fraternidad por la coincidencia en los fines políticos perseguidos y en la oposición visceral a España.

En suma, para el catalanismo España es sólo un Estado, no una nación. Planteamiento cuya vigencia es mantenida hasta hoy como núcleo de la mentalidad catalanista, y que apuntalaron historiadores como Borja de Riquer en su polémica de 1890 desde las páginas de *Historia social*. Para el nacionalismo sabiniano, la identidad española tiene un contenido más profundo y violento, explicable por su núcleo biológico y que no ha desaparecido. Un antiguo proverbio vasco decía: «*Arrotz herri, otso herri*» («País extraño, país de lobos»). Para los herederos de Sabino Arana, el español sigue siendo el *otso beltza*, el lobo negro según la letra del himno *Batasuna* contra el que deben luchar los vascos. La española es, pues, una identidad satanizada.

Opinión e ideología

Las ideologías nacionalistas se sirven siempre eficazmente de las falsas evidencias que acaban calando en la opinión pública atendiendo al efecto mayoría. A fuerza de escuchar una y otra vez que Cataluña es una nación y que España no lo es, o que existió un pueblo vasco que sigue utilizando su lengua milenaria y que aspira incansablemente a la independencia, la opinión acaba aceptándolo dentro y fuera de nuestras fronteras. Incluso se da por bueno el objetivo político de una Euskal Herria a ambos lados del Pirineo que nunca existió y que tendría que comprender una Navarra sólo minoritariamente nacionalista, así como unos territorios vascofranceses donde el nacionalismo lo es aún más, y en nombre de un idioma propio también minoritario en la región desde hace más de un siglo. El pueblo vasco en tanto que *Volk* está por encima de la realidad política y de la historia. Vale la pena citar las primeras frases del manifiesto del PNV en el último Aberri Eguna: «somos un Pueblo [con mayúscula] con identidad propia en el conjun-

to de los Pueblos de Europa, depositario de un patrimonio histórico, social y cultural propio y asentado geográficamente en siete territorios ubicados en dos Estados a ambos lados de los Pirineos».

Resulta obvio que, para materializar ese objetivo político, adscrito al «Pueblo Vasco en su integridad», la democracia no es un medio válido.

En un artículo aparecido recientemente en *El País*, Josep Ramoneda comentaba el lamento de un españolista que asimilaba la pérdida de Cataluña a la pérdida de un brazo; Cataluña es «un cuerpo entero», fue la respuesta. Recordemos la obsesiva insistencia del PNV de Ibarretxe sobre una «consulta» que abriera el camino de la autodeterminación, «el derecho del pueblo vasco a decidir». La lectura ingenua de ambos planteamientos es que el Estado español actúa contra la democracia al no crear los cauces para una expresión democrática de las dos principales nacionalidades periféricas que satisficiera su deseo de independencia. Pensar de otro modo es signo de españolismo dudosamente demócrata, cuando no de franquismo. Por supuesto, vascos y españoles, catalanes y españoles son especies diferentes.

Las encuestas de opinión vienen ofreciendo desde los inicios de la transición una imagen más compleja, y sobre todo distinta de la anterior. Para empezar, oscilando según los casos y los tiempos, la aspiración de independencia en Euskadi y en Cataluña, no hablemos de Galicia, gira en torno a un 30%, lo cual no es poco, pero queda muy por debajo de la votación de los partidos que, de un modo u otro, hablan de soberanía y sobre todo es base del todo insuficiente para plantear una autodeterminación como derecho democrático, salvo que el propósito consista en desestabilizar las respectivas autonomías y forzar el cambio en una opinión hasta ahora muy estable. La precisión del Euskobarómetro elaborado por la Universidad del País Vasco permite comprobar la falacia de un País Vasco mayoritariamente nacionalista, ya que las proporciones vienen situándose en torno al 50%, incluso con cierto predominio no nacionalista. Los vascos están satisfechos con el Estatuto, aun cuando desearían ampliarlo, y volverían a dar el voto afirmativo a la Constitución de 1978. Ciertamente hay un predominio en el voto a los partidos nacionalistas, aunque tan poco aplastante que en las últimas elecciones han podido formarse una mayoría parlamentaria y un gobierno constitucionalista. Hay que tomar en consideración además la total ausencia de libertad política que afecta a los no nacionalistas en las localidades menores de 25.000 habitantes.

Para cerrar el círculo, tanto en Euskadi como en Cataluña lo que predomina sin lugar a dudas es la identidad dual. Los ciudadanos vascos y catalanes se consideran antes que nada vascos y catalanes, sólo que dos tercios de ellos sienten la doble identidad, vasco y español, catalán y español. El problema no reside entonces en el propósito nacionalista de desequilibrar la balanza a favor propio, siempre que sea por procedimientos democráticos, en el sentido de una identidad única. Pero tendrán que reconocer el carácter también democrático de quienes se esfuercen por mantener la identidad dual, ajustada por lo demás a la circunstancia constitucional y autonómica. La menos imprecisa definición de España es la de una «nación de naciones», en la cual se entrelazan sobre un eje los proyectos de construcción nacional animados por los movimientos nacionalistas de las nacionalidades históricas. Nuevo recuerdo obligado: hoy tanto Euskadi como Cataluña tienen gobiernos con presidencia socialista, no nacionalista. Consecuencia última: el pueblo vasco y el «cuerpo entero» de la nación catalana no son realidades políticas y sociológicas, sino elementos nucleares de proyectos políticos dirigidos a forzar una fractura que no responde a los sentimientos ni a los objetivos políticos mayoritarios entre los ciudadanos de una y otra comunidad. Apreciación que no excluye su éxito en el futuro, si tenemos en cuenta el desigual énfasis con que se afirman las respectivas identidades, débil y en cierto grado confusa para España, de fuerza creciente en Cataluña y en Euskadi, con una interrelación simbólica asimismo en aumento.